

Expediente: SRAD-1230.0/2023

I/

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS, POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE ALZADA IMPROPIO INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE OBJETIVO TARSYS, S.L. CONTRA LOS PLIEGOS Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN Nº 6012300170 CONVOCADA POR METRO DE MADRID, S.A. PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE UN SERVICIO DE APOYO AL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Con fecha 6 de junio de 2023, Metro de Madrid, S.A. convoca, a través del Perfil del Contratante de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, la licitación nº 6012300170 para la contratación, por procedimiento abierto simplificado del servicio de apoyo al delegado de protección de datos.

2.- En fecha 13 de junio de 2023, por parte de Metro de Madrid, S.A. se publicó la siguiente corrección de errores del Pliego de prescripciones técnicas en el perfil de contratante:

"(...) En el apartado "3.2 Perfiles Profesionales" del Pliego de Prescripciones Técnicas:

▪ **Donde dice:**

Consultor senior de seguridad: Ingeniero con más de 5 años de experiencia en tareas de auditorías tecnológicas con certificaciones de seguridad del tipo CISA, CISM; Lead Auditor (...)

▪ **Debe decir:**

Consultor senior de seguridad: Licenciado/Graduado con más de 5 años de experiencia en tareas de auditorías tecnológicas con certificaciones de seguridad del tipo CISA, CISM; Lead Auditor (...)".

3.- Durante el plazo previsto para la presentación de ofertas o solicitudes de participación, que finalizaba el 17 de julio de 2023 a las 12:00 horas, presentaron oferta las dos siguientes empresas:

- AUREN CONSULTORES SP, S.L.P.
- S2 GRUPO SOLUCIONES DE SEGURIDAD

4.- Frente a los pliegos de condiciones que rigen la mencionada licitación, la entidad OBJETIVO TARSYS, S.L. presenta escrito calificado como recurso de reposición el 17 de julio de 2023 a las 12:24 horas.

5.- Con fecha 19 de julio de 2023 el recurso de reposición ha sido notificado a Metro de Madrid, S.A. en la sede social sita en la Avda de Asturias nº 4 de Madrid.



Expediente: SRAD-1230.0/2023

6.- El escrito presentado por la recurrente el 17 de julio de 2013 como recurso de reposición debe ser calificado como recurso de alzada impropio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el artículo 44.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el apartado 43 del cuadro resumen del pliego de condiciones particulares de la licitación nº 6012300170.

7.- El recurso de alzada tiene su fundamento, sucintamente, en los siguientes motivos:

- Los criterios de licitación limitan la competencia y el acceso a la pública concurrencia.
- Los requisitos exigidos no se corresponden con las tareas definidas en los pliegos ni con los exigidos por la legislación para puestos del perfil de delegado de protección de datos.

8.- Metro de Madrid, S.A. el 25 de julio de 2023 ha emitido informe sobre el recurso de interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Competencia.

La competencia para resolver el presente recurso le viene atribuida a esta Consejería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, el Decreto 38/2023, de 23 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid y el Decreto 244/2023, de 4 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

SEGUNDO.- Procedencia del recurso de alzada impropio.

Respecto a la **procedencia del recurso interpuesto**, el artículo 44.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público dispone que:

“Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (...).

En el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas, aquellas se impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que



Expediente: SRAD-1230.0/2023

esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela (...)."

TERCERO.- Inadmisión del recurso por extemporáneo.

Con fecha 6 de junio de 2023, Metro de Madrid, S.A. convoca, a través del Perfil del Contratante de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, la licitación nº 6012300170 para la contratación, por procedimiento abierto simplificado del servicio de apoyo al delegado de protección de datos.

En fecha 13 de junio de 2023, por parte de Metro de Madrid, S.A. se publicó la siguiente corrección de errores del pliego de prescripciones técnicas en el perfil de contratante:

"(...) En el apartado "3.2 Perfiles Profesionales" del Pliego de Prescripciones Técnicas:

▪ **Donde dice:**

Consultor senior de seguridad: Ingeniero con más de 5 años de experiencia en tareas de auditorías tecnológicas con certificaciones de seguridad del tipo CISA, CISM; Lead Auditor (...)

▪ **Debe decir:**

Consultor senior de seguridad: Licenciado/Graduado con más de 5 años de experiencia en tareas de auditorías tecnológicas con certificaciones de seguridad del tipo CISA, CISM; Lead Auditor (...)".

El apartado 43 del cuadro resumen del pliego de condiciones particulares de la licitación señala que contra los actos de preparación, adjudicación y modificación del contrato cabe recurso de alzada impropio ante el titular de la Consejería de la Comunidad de Madrid competente en materia de transportes, conforme al artículo 44.6 de la Ley de Contratos del sector Público y a la Ley 39/2015.

El escrito calificado como recurso de alzada impropio en virtud del artículo 115.2 de la Ley 39/2015 fue presentado por la entidad recurrente el 17 de julio de 2013.

Según dispone el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, "El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos."

El mencionado plazo, según lo dispuesto en el artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, se computa a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y termina el día del mes siguiente que coincida con la fecha de recepción, salvo que sea inhábil, en cuyo caso se prorrogará el plazo hasta el primer día hábil.

En el presente supuesto, según lo expuesto anteriormente, el escrito de interposición del recurso se ha presentado fuera del término legal, por lo que procede su inadmisión.



Expediente: SRAD-1230.0/2023

CUARTO.- Falta de legitimación

Por otro lado, considerando que la recurrente OBJETIVO TARSSYS, S.L. en ningún momento ha presentado oferta para concurrir a la licitación referenciada, ni ha acreditado algún tipo de imposibilidad para participar en la licitación (más allá de discrepar con el planteamiento de la misma), y habida cuenta de que el escrito calificado como recurso de alzada ha sido presentado una vez transcurrido el plazo para tomar parte en la licitación; resulta de todo ello que la recurrente carece de legitimación para la formulación del recurso.

Ordena el **primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Contratos del Sector Público** que *“Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.”*

En el mismo sentido, el **artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre**, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que *“Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabra fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley”*.

Para la interpretación de estos preceptos relativos al interés legítimo requerido para ser recurrentes es conveniente acudir -entre otras- a la doctrina de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública, que procede traer al presente informe, por todas, mediante la expresada en la **Resolución nº 217/2023 de fecha 25 de mayo de 2023, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACPCM)**, que a efectos expositivos se transcribe parcialmente a continuación: **FJ 2º.-** *“(…) A mayor abundamiento señalar que el recurrente no ha presentado oferta al presente procedimiento de licitación posteriormente a la interposición del recurso, lo que hace cuestionar su legitimación. El artículo 48 de la LCSP reconoce legitimación para la formulación del recurso especial en materia de contratación a aquellos “cuyos derechos e intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta por las decisiones objeto del recurso”. (...) Según afirma la STC 67/2010, de 18 de octubre: “Como ya se ha señalado, en lo que aquí interesa, la decisión de inadmisión puede producirse por la falta de legitimación activa para accionar o para interponer un recurso, esto es, por la ausencia de derecho o interés legítimo en relación con la pretensión que se pretende articular. En tal orden de ideas, este Tribunal ha precisado, con relación al orden contencioso administrativo, que el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar esta. O, lo*



Expediente: SRAD-1230.0/2023

que es lo mismo, **el interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida**(SSTC 252/2000, de 30 de octubre [RTC 2000, 252], F.3; 173/2004, de 18 de octubre [RTC 2004,173], F.3; y 73/2006, de 13 de marzo [RTC 2006, 73], F.4). En consecuencia, para que exista interés legítimo, la actuación impugnada debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso (STC 45/2004, de 23 de marzo [RTC 2004, 45], F 4)”.

Este Tribunal comparte criterio con el **Tribunal Administrativo Central** que ha establecido, valga por todas la Resolución no 1298/2019, “En nuestra Resolución 990/2019, de 6 de septiembre recientemente hemos declarado que: este Tribunal viene restringiendo la **legitimación para interponer el recurso** especial a quienes hayan sido parte del procedimiento, entre otras, la resolución 195/2015, de 27 de febrero, en que se dijo: ‘**Este derecho o interés legítimo (como hemos dicho en la Resolución nº 619/2014, en la 899/2014 o en la 38/2015) no concurre entre quienes no han participado en el procedimiento, porque no pueden resultar adjudicatarios del mismo**. No existe, en este caso, ninguna ventaja o beneficio que sea consecuencia del ejercicio de su acción, equiparable o asimilable a ese derecho o interés en que se concreta la legitimación activa para intervenir en este recurso especial’. Traslado este criterio a las impugnaciones de pliegos resulta, con carácter general, que **únicamente los licitadores pueden impugnar los pliegos**. Afirmación que se matiza para permitir la impugnación de los pliegos a aquellas personas que no hayan podido tomar parte en la licitación precisamente por el motivo en que fundamentan su recurso. En este sentido Resolución 967/2015, de 23 de octubre, reiterada en la 809/2019 de 11 de julio: ‘El recurso debe ser inadmitido también por falta de legitimación activa, pues la entidad ya no va a poder tomar parte en el procedimiento de contratación, no impidiéndole -como ya hemos visto anteriormente-el motivo de su impugnación de los pliegos licitar al procedimiento que ahora recurre.

Este Tribunal ha resuelto ya en diferentes resoluciones sobre la legitimación del recurrente que no participa en el procedimiento de contratación, admitiéndola **excepcionalmente** (por todas, Resolución 924/2015, de 9 de octubre) **cuando el motivo de impugnación de los pliegos impide al recurrente participar en un plano de igualdad en la licitación** (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7a, Sentencia de 5 Junio 2013), circunstancia esta que no es el caso ahora examinado. (...) Así pues, para admitir legitimación para recurrir los pliegos que rigen una licitación resulta necesario que el recurrente haya participado en la licitación o se haya visto impedido de hacerlo en base a las restricciones introducidas en los pliegos objeto de recurso, pues **no resulta admisible un recurso en materia de contratación basado en un mero interés en la legalidad abstracta del procedimiento de licitación, no admitiéndose una acción popular en esta materia**. (...) Ante la falta de desarrollo pormenorizado por la recurrente de los motivos que imposibilitaron la presentación de oferta, procede negarle legitimación para recurrir y, en consecuencia, inadmitir el recurso presentado”.

En el presente supuesto el recurrente impugna los pliegos, sin embargo, posteriormente no presenta su oferta, por ello procede analizar si estamos ante un supuesto de legitimación de acuerdo con la doctrina expuesta anteriormente. Los motivos de impugnación son la calificación del contrato, su duración, la garantía y los criterios de adjudicación que, a su juicio, no establecen los criterios de valoración ni están justificados en el contrato. **El recurrente no justifica qué le**



Expediente: SRAD-1230.0/2023

impide presentar oferta mas allá de decir “Es evidente que esta parte sufre un perjuicio dado que mientras interpone el recurso no puede presentar una solicitud de participación; razón por la cual lo mas lógico es la suspensión que se propone”. En ningún momento referencia cláusula alguna que le impida participar en el procedimiento de licitación, no desarrollando, ni siquiera de manera sucinta, los motivos que imposibilitaron la presentación de su oferta. A mayor abundamiento, este Tribunal no aprecia que pudiera haberle impedido hacerlo en base a alguna restricción introducida en los pliegos objeto del recurso o que le impida participar en un plano de igualdad en la licitación. En consecuencia, de acuerdo con la doctrina expuesta, también procede inadmitir el recurso por falta de legitimación.(...)”.

El **artículo 55 de la Ley de Contratos del Sector Público** ordena que “El órgano encargado de resolver el recurso, tras la reclamación y examen del expediente administrativo, podrá declarar su inadmisión cuando constare de modo inequívoco y manifiesto cualquiera de los siguientes supuestos: (...) b) La falta de legitimación del recurrente o de acreditación de la representación de la persona que interpone el recurso en nombre de otra, mediante poder que sea suficiente a tal efecto. (...)”. Y ordena el **artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre**, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), que “Serán causas de inadmisión las siguientes: (...) b) Carecer de legitimación el recurrente. (...)”.

De modo que, sin perjuicio de la inadmisión del recurso por extemporáneo, así como de objeciones materiales o de fondo a las que a continuación se hará referencia, resulta que OBJETIVO TARSYS, S.L. carece de cualquier interés legítimo que le permita impugnar la meritada licitación.

QUINTO.- Sobre la función de asesoramiento legal exclusiva de la abogacía.

Subsidiariamente a la inadmisión del recurso por las causas mencionadas, y entrando en los argumentos de fondo, en el mencionado recurso formulado por OBJETIVO TARSYS, S.L., en síntesis, se considera exorbitante el requisito de que uno de los perfiles determinados por los pliegos de la licitación referenciado, deba tener titulación de licenciatura o grado en Derecho y que, además, sea abogado (esto es Máster en Abogacía y colegiado); entiende que ese requisito limita la competencia en tanto que no es un requisito de la legislación para el desarrollo de las tareas designadas en los pliegos; y, entiende además el recurso que ese requisito es innecesario para la asunción de la responsabilidad y puesto de trabajo del Delegado de Protección de Datos, que no requiere una determinada formación académica universitaria. Pero las consideraciones, entendimientos y argumentaciones mantenidos por OBJETIVO TARSYS, S.L., no se pueden acoger y, por lo tanto, el mismo debe decaer.

El apartado nº 2.1 del pliego de prescripciones técnicas indica el alcance del servicio a prestar por la empresa adjudicataria de la licitación, por medio del cual se proveerá apoyo al delegado de protección de datos de Metro de Madrid, siempre previa demanda de éste.

Dicho servicio agrupa la asistencia en distintos campos, cuales son:

- Los denominados derechos ARCO.
- La cooperación con las autoridades de control.



Expediente: SRAD-1230.0/2023

- La formación y la concienciación.
- El asesoramiento legal en materia de protección de datos de carácter personal.

En cuanto se refiere al asesoramiento legal en materia de protección de datos de carácter personal -una de las partes del servicio que se pretende contratar- el apoyo a prestar podrá consistir en solicitud de informes sobre cómo aplicar la normativa vigente a una situación concreta, adecuación a la legalidad de un procedimiento vigente, revisión de clausulado ya redactado, redacción de una cláusula de cumplimiento de deber de información nueva, redacción de un contrato de encargo de tratamiento, etc.

A este respecto conviene recordar que el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE), en diversos apartados, determina que la función de asesoramiento legal es propia de la Abogacía.

Así, ordena el **artículo 1.2 del EGAE** que: *“(...) La profesión de la Abogacía se ejerce en régimen de libre y leal competencia. Su contenido consiste en la actividad de asesoramiento, consejo y defensa de derechos e intereses públicos y privados, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas, en orden a la concordia, a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales.(...)”*.

Del mismo modo, ordena el **artículo 4.1 del EGAE** que: *“(...) Son profesionales de la Abogacía quienes, estando en posesión del título oficial que habilita para el ejercicio de esta profesión, se encuentran incorporados a un Colegio de la Abogacía en calidad de ejercientes y se dedican de forma profesional al asesoramiento jurídico, a la solución de disputas y a la defensa de derechos e intereses ajenos, tanto públicos como privados, en la vía extrajudicial, judicial o arbitral. (...)”*.Y, lo que es más, ordena la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que el asesoramiento y consejo jurídico profesional, corresponde en exclusiva al Abogado.

Así, el **artículo 542 de la dicha ley** ordena que: *“(...) Corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico.(...)”*.

Habida cuenta de que una parte de los servicios a contratar, según se señala en el pliego de prescripciones técnicas de la licitación comprende el **asesoramiento legal** propiamente dicho (apartado 2.1 del pliego, entre otros), resulta obligado contar, al menos, con un **perfil de profesional de abogado**, y no -tal y como sostiene la recurrente- **otro perfil**, con titulación y formación adecuada, diferente de Derecho y sin colegiación profesional, como podría ser disponer de certificación como delegado de protección de datos, postgrados o masters especializados, y experiencia profesional en el sector.

Por lo que, como ya se anticipaba, el motivo esgrimido por OBJETIVO TARSYS, S.L. debe decaer, y el argumento debe ser desestimado, porque ese otro perfil -con titulación y formación adecuada, diferente de Derecho y sin colegiación profesional- que propone la recurrente sea admitido para tomar parte en la licitación de referencia, carecería de la cualificación para el ejercicio profesional de la función de asesoramiento legal exigida por la legislación.



Expediente: SRAD-1230.0/2023

SEXTO.- Sobre el objeto de la licitación nº 6012300170 para la contratación del servicio de apoyo al delegado de protección de datos de Metro de Madrid, S.A.

El objeto de la licitación nº 6012300170 es, precisamente, la contratación de un servicio de apoyo al delegado de protección de datos de Metro de Madrid, S.A., sin que, en ningún caso, comprenda la provisión del empleo o puesto de trabajo de “Delegado de Protección de Datos”.

La preparación y adjudicación de la licitación nº 6012300170 se rige por lo señalado en el Título I del Libro III de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En particular, el **artículo 11.1 de la Ley de Contratos** ordena que *“La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral queda excluida del ámbito de la presente Ley.”*

Por tanto, sin entrar a discutir en la presente orden acerca de la titulación más o menos necesaria para la provisión del delegado de protección de datos, lo cierto es que la licitación tiene por objeto un contrato de servicios de apoyo en diferentes ámbitos a dicha figura, y ese contrato en ningún caso tiene por objeto la provisión del puesto de delegado de protección de datos. Así, el argumento sostenido por OBJETIVO TARSYS, S.L. en su recurso es inoportuno pues no se trata de contratar las funciones del delegado de protección de datos, sino el apoyo que requiera éste para el desempeño de sus funciones que realiza directamente, por lo que el motivo también debe decaer.

SÉPTIMO.- Sobre la restricción de la competencia invocada por la recurrente

La licitación nº 6012300170 publicada por Metro de Madrid, S.A. garantiza la libertad de acceso a la misma, la transparencia del procedimiento, la no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y asegura la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

En la mencionada licitación, el apartado nº 21 del Cuadro Resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares dedicado a “Solvencia técnica y profesional” establece que:

“(...) Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

a. Relación de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años, indicando el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que



Expediente: SRAD-1230.0/2023

acrediten la realización de la prestación. Para acreditar la solvencia los servicios deberán ser similares a los que constituyen el objeto de la presente licitación [servicios de apoyo jurídico y técnico al Delegado de Protección de Datos] por importe conjunto de 20.000,00 euros(IVA no incluido).

b. Tener implantado un sistema de: Gestión de la Calidad o medidas de control de la calidad (...)”.

Así pues, los licitadores deberán cumplir dos requisitos de solvencia técnica y profesional que acreditarán, por un lado, aportando la relación de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato y, por otro lado, presentando los certificados expedidos por organismos independientes que permitan conocer que el licitador dispone de certificación vigente en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 o equivalente. Es decir, dos requisitos de solvencia técnica y profesional que nada tienen que ver con el eje del recurso, es decir, con el perfil profesional en Abogacía contra el que clama dicho recurso.

A su vez, el apartado nº 23 del Cuadro Resumen del pliego dedicado a “Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato” no establece ninguna restricción. Por lo que, del mismo modo que con la solvencia técnica, nada tiene que ver el eje del recurso presentado, con la habilitación empresarial o profesional exigida para la realización del contrato, es decir, con el perfil profesional en abogacía exigida para la realización de una de las partes del servicio que se pretende contratar.

En particular, en cuanto a la pretendida restricción de la competencia invocada por la recurrente, la **Memoria Justificativa** de la licitación de referencia, a los efectos del **artículo 99.3 de la Ley de Contratos**, aclara la razón de que la misma no se divida en lotes, dado que el servicio a contratar se ha configurado como único y prestado por un equipo:

“(…) NO se divide en lotes (artículo 99.3 LCSP):

- Justificar los motivos de la no división en lotes: Se trataría de la realización de diferentes tareas por especialistas de diferente perfil pero que tienen que estar coordinadas desde el punto de vista técnico y de gestión. En definitiva, se trataría de un servicio único prestado por un equipo. (...)”.

Y, sin perjuicio de lo anterior, la misma Memoria indica que en la licitación *“(…) No existen tareas críticas que no puedan ser subcontratadas. (...)”*, y, a los efectos del **artículo 215 de la Ley de Contratos**, contempla la posibilidad de subcontratación de las prestaciones que configuran el servicio al que se refiere la licitación.

De modo que el objeto del contrato se compone por un servicio prestado por un conjunto de perfiles profesionales, formando un equipo coordinado, que de ningún modo supone que la totalidad del servicio requiera una concreta habilitación. Y, por otra parte, el empresario que concurra a la licitación puede subcontratar -si a su derecho conviene- todos o alguno de los perfiles con los que se proponga prestar el servicio contratado, siempre y cuando éste se preste de manera conjunta y coordinada.

Por lo que, en definitiva, la pretendida restricción de la competencia invocada por la recurrente ninguna cabida real tiene en la licitación, y por esa carencia, el motivo debe ser íntegramente desestimado.



Expediente: SRAD-1230.0/2023

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se entiende que, al margen de que los pliegos y condiciones de contratación de la licitación nº 6012300170 convocada por Metro de Madrid, S.A. para la contratación, por procedimiento abierto simplificado, de un servicio de apoyo al delegado de protección de datos, resultan acordes a la legalidad, el recurso calificado como de alzada impropio presentado por la entidad OBJETIVO TARSYS, S.L. se ha presentado fuera del plazo previsto en la Ley y consecuentemente debe inadmitirse.

VISTOS los correspondientes artículos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás preceptos de aplicación,

DISPONGO

Inadmitir por extemporáneo el recurso de alzada impropio interpuesto por la representación de **OBJETIVO TARSYS, S.L.** contra los pliegos y condiciones de contratación de la licitación nº **6012300170** convocada por Metro de Madrid, S.A. para la contratación, por procedimiento abierto simplificado, de un servicio de apoyo al delegado de protección de datos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, computados a partir del día siguiente al de recepción de la presente notificación.

Madrid,
EL CONSEJERO DE VIVIENDA,
TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden de 9 de septiembre de 2021)
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA





Comunidad de Madrid

ACUSE DE RECIBO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA

DATOS DEL EXPEDIENTE

Expediente: 06-SRAD-01230.0/2023

Procedimiento Administrativo: Recursos (alzada, reposición y extraordinario de revisión)

Unidad Administrativa: Área de Recursos y Asuntos Contenciosos (Transportes)

DATOS DE LA NOTIFICACION

Asunto: 06-SRAD-01230.0/2023 - RESOLUCION RECURSO

Descripción:

Fecha de Puesta a disposición: 07/11/2023 09:36

NOTIFICADO A:

Apellidos, Nombre / Razón Social: OBJETIVO TARSYS SL

Número documento identificación: B65101149

Correo al que se ha enviado el aviso: info@tarsys.es

DATOS DE ACUSE DE RECIBO

Fecha: 07/11/2023 23:59:25

Causa: ACEPTADA

Acceso mediante: CERTIFICADO

OBJETIVO TARSYS SL - CIF B65101149 - FNMT-RCM

Nº de serie: 7b1ccf2c1bec55b2634912dc61761e6c

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: **0982521398297974166620**